



PRONUNCIAMIENTO DEL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO, ANTE LA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL HOMICIDIO DEL NIÑO ERICK G.

El 16 de julio del presente año, esta Procuraduría emitió un pronunciamiento por la localización del cuerpo sin vida del niño Erick G.¹, de tres años de edad, mediante el cual se recomendó al señor Fiscal General de la República que girase instrucciones específicas para darle prioridad al caso, a efectos de individualizar a los responsables del hecho, de conformidad a la normativa legal y constitucional del país.

Expreso mi reconocimiento a la eficiencia de las actividades realizadas por las entidades encargadas de la investigación del delito, pues como resultado de ello, la Fiscalía General de la República, el pasado 22 de agosto, hizo del conocimiento público la captura de la principal sospechosa del homicidio del niño Erick G., a quien se le acusa del delito de Homicidio Agravado; siendo esta, una familiar cercana que se encontraba en la vivienda donde el niño había sido visto por última vez.

Si bien, ahora este caso se encuentra en manos de la justicia, es importante destacar que hechos como el acontecido con el niño Erick G. exponen la cruel realidad que viven las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, en entornos desfavorecedores para su desarrollo integral y expuestos a diversas situaciones de violencia que atentan contra sus derechos fundamentales.

Estos hechos, aunque parecieran ser aislados, lamentablemente no lo son; sin embargo, la conmoción es más evidente cuando las consecuencias son extremas y se atenta contra el derecho a la vida, como en el caso en cuestión. No obstante, el Estado salvadoreño está al tanto de la situación que atraviesan las niñas, niños y adolescentes respecto a las amenazas y vulneraciones a su integridad personal. En este sentido, las estadísticas del Sistema de Información de la Niñez y de la Adolescencia en El Salvador, muestran que el 56.50% de casos atendidos por las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, desde el año 2012 al 2018, han sido por presuntas amenazas o vulneraciones a este derecho. Estas cifras se incrementaron para el año 2019, al alcanzar el 57.09% de la totalidad de casos, correspondiendo el 50.91% a la integridad física y el 24.3% a la integridad sexual².

En definitiva, estos datos nos deben llevar a la reflexión de que algo no está funcionando en el país en materia de protección de la niñez y de la adolescencia, pese a la existencia de un Sistema Nacional de Protección Integral, marcos legales especializados y de políticas - incluso de primera infancia-, cuando el espacio en el cual la niñez debería estar más segura es donde tienen lugar estos lamentables sucesos. Y es que, casos como el del niño Erick G., son el resultado del abandono de la infancia, la falta de aplicación de políticas

-
1. Se protege la identidad de la víctima de conformidad al artículo 16 y 46 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, respectivamente.
 2. Sistema de Información de la Niñez y de la Adolescencia en El Salvador, en <http://app.conna.gob.sv/sinaes/busqueda.html?t=-402>, visto el 24 de agosto de 2020.



públicas multisectoriales que involucren a la familia, a la sociedad, a los actores territoriales correspondientes, para identificar las causas de toda forma de violencia y construir mecanismos efectivos de prevención y de atención oportuna, considerando el ciclo de vida y los diferentes contextos en que se desarrolla la niñez de nuestro país.

En virtud de lo anterior, en el año 2018 el Comité de los Derechos del Niño instó al Estado salvadoreño³ a investigar, enjuiciar y sancionar rápidamente los casos de asesinatos de niñas, niños y adolescentes; estudiar a fondo las causas fundamentales de estos homicidios y tomar medidas para prevenirlos; establecer una base de datos nacional sobre todos los casos de malos tratos, descuido de niñas y niños, y llevar a cabo una evaluación exhaustiva del alcance, las causas y el carácter de este tipo de violencia; entre otras medidas.

Por lo tanto, el Estado debe proporcionar mecanismos efectivos de protección especial a la niñez que se encuentra en situaciones desfavorecedoras que les impliquen un significativo riesgo de ser víctimas de violencia, para lo cual es prioritario que se identifiquen los factores de riesgo personales, familiares o de sus cuidadores, relacionales, sociales o comunitarios, para atenderlos oportunamente y prevenir daños mayores e irreversibles.

Por todo lo antes expresado, y de conformidad a mis atribuciones reguladas en el artículo 194 romano I ordinales 1°, 2° y 7° de la Constitución de la República, **recomiendo:**

I. Al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia:

- a) Que en cumplimiento de sus funciones, recopile y analice la información sobre el estado de los derechos de la niñez y adolescencia en el país, con particular atención en los factores de riesgo de este grupo de la población ante la violencia en todas sus manifestaciones, que impacta en su derecho a la integridad personal y a la vida, según cada etapa del ciclo de vida de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, que se obtengan y desagreguen datos sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes de manera directa o indirecta.
- b) Que adopte medidas encaminadas a fortalecer los mecanismos de protección especial para la niñez y adolescencia, entre ellos, el funcionamiento de las Juntas de Protección, a efectos de que se atiendan oportunamente los casos de violencia contra la niñez que ocurren en el seno de la familia, con el soporte psicosocial que dicha atención requiere; esto, en razón a la alta demanda por afectaciones a la integridad personal y la reducida capacidad en cuanto a recursos humanos y programas de los que pueden hacer uso las Juntas de Protección para responder, según lo amerite, cada caso recibido.
- c) Que desde los Comités Locales de Niñez y Adolescencia se propongan políticas locales que atiendan la realidad de los contextos territoriales en que se desarrollan las niñas, niños y adolescentes, encaminadas a la prevención y atención de la violencia desde un enfoque transformador de las

3. Comité de los Derechos del Niño (2018). Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de El Salvador, 29 de noviembre de 2018.



relaciones entre la familia, la sociedad y la niñez, a efectos de potenciar el rol de corresponsabilidad en la protección de los derechos de esta población.

d)Que por medio de la coordinación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, se promueva el diálogo multisectorial para el estudio, elaboración e implementación de medidas de índole legislativas, educativas, sociales y culturales, institucionales y especiales de protección para la niñez y adolescencia, orientadas a la prevención y atención ante cualquier forma de violencia hacia esta población.

II. A la Fiscalía General de la República:

a)Que con el respeto de las garantías constitucionales y legales de la persona acusada por el crimen del niño Erick G., se continúe con las acciones pertinentes a efectos de obtener una resolución judicial que contenga decisión sobre la responsabilidad o no de la misma y la reparación para la familia de la víctima.

Finalmente, expreso mi más profundo rechazo a cualquier forma de violencia en nuestro país. Por lo que también hago el llamado a la sociedad en general, a que asuma su rol de corresponsabilidad en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

San Salvador, 28 de agosto de 2020.

José Apolonio Tobar Serrano
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos